

nas en los trabajos forzados, por cuyo acto se quejan de vulnerarse en sus personas las garantías á que se refiere el artículo 22 de la Constitución General: y

Considerando: que la justicia al ejercer su facultad federal de interpretar el texto de la Constitución, para aplicarla rectamente debe desentenderse de toda circunstancia que se refiera á la intencion del legislador, cuando la letra de la Ley sea terminante: Que en el artículo 22 de la Constitución en que se prohíbe toda clase de tormento, quedó comprendido sin duda alguna la pena del grillete y la cadena, que debe considerarse como un tormento reagravante de la privacion de la libertad.

Por lo expuesto, y con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitución, se declara:

Que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Zacatecas, á 28 de Diciembre último, que otorgó el amparo á Lucio Gutierrez y demás quejosos, contra la pena de grillete que les fué impuesta por la Jefatura Política de esa Ciudad.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia, para los efectos consiguientes; publíquese archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—José M^o Iglesias.—M. Anza.—Juan J. de la Garza.—José Arteaga.—Ignacio Ramírez.—S. Guzman.—L. Velazquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.—L. M. Aguilar, secretario.

Es copia que certifico. México, Febrero 11 de 1875.—Lic. Enrique Lanza, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado 2º de Distrito de Sonora por D. Ricardo Laborin, contra el decreto de la Legislatura del Estado, expedido el 13 de Diciembre de 1873, que priva de los derechos de ciudadano sonorense á todo funcionario ó empleado que no preste la protesta de ley á las reformas y adiciones de la Constitución Federal.

Pedimento del O. Promotor fiscal.

O. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal que suscribe, ha visto el presente juicio de amparo, promovido por D. Ricardo Laborin, en el que por virtud de la ley de 13 de Diciembre de 1873, cree violadas las garantías que le otorga la Constitución General en las fracciones 1ª, 2ª, 3ª y 4ª del art. 35. Por mas que ha examinado el presente expediente, no encuentra fundamentos legales bastantes, para poder apoyar la solicitud del quejoso, porque aunque es cierto que la referida ley del Estado, en su art. 2º, pena con la privacion de los derechos de ciudadano sonorense á todo empleado público que se negase á otorgar la protesta á las adiciones y reformas á la Constitución Federal, cuya pena es por la duracion del período del empleo, no es ménos cierto tambien que aunque el Sr. Laborin ha incurrido en esta pena, por no haber prestado la debida protesta, sus derechos de sonorense, aunque suspensos, en hábito, no se ha llegado el caso para hacer uso de este recurso, prohibiéndole alguna autoridad el ejercicio de esos mismos derechos, únicos momentos en que pudiera tener razon para hacer su queja; entonces se examinaría si dicha ley era anticonstitucional, vulnerando con este hecho las garantías que invoca el quejoso; pero el que suscribe cree que no ha llegado este tiempo, y

por lo mismo juzgándolo extemporáneo, es por lo que en su concepto es de decretarse que no ha lugar por ahora, al amparo que se solicita.

Guaymas, Noviembre 20 de 1874.—
Lic. José Monteverde.

Es copia que certifico. Guaymas, Diciembre 17 de 1874.—*Lic. Monteverde.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Guaymas, Diciembre 15 de 1874.

Visto el juicio de amparo promovido por el C. Ricardo Laborin, contra la H. Legislatura del Estado, por creer que en su persona se han violado las garantías que le concede el art. 35 de la Constitución General, en sus fracciones 1ª, 2ª, 3ª y 4ª, por la expedición del decreto de 13 de Diciembre del año próximo pasado, que priva de los derechos de ciudadano sonorense á los funcionarios y empleados públicos del Estado, de cualquiera categoría que fuesen, que se nieguen á protestar las reformas hechas á la Constitución General de la República:

Visto: el informe con justificación dado por la H. Legislatura; el parecer del C. Promotor fiscal, que consulta no haber lugar al amparo solicitado, por ser extemporáneo; la citación para sentencia, y cuanto mas consta y tenerse presente convino.

Considerando: haberse pedido á la H. Legislatura del Estado, el informe con justificación, por no haber otra autoridad designada por el quejoso, como ejecutora del acto reclamado, quedando con esto obsequiada la disposición de la ley.

Considerando: que sin mezclarse el juez que actúa en si es ó no anticonstitucional el decreto del Estado, de 13 de Diciembre del año próximo pasado, solo debe verse si ha llegado el caso de producir sus efectos y que con ellos se viola alguna de las garantías que al quejoso concede la Constitución General de la República.

Considerando: no ser este caso llegado

aún, pues que sin embargo de la disposición del citado decreto, no puede decir el C. Laborin que se le haya entorpecido ninguna de las cuatro garantías que le concede el art. 35 de la Constitución General, puesto que de ella no se queja, sino solo de la expedición del citado decreto de 13 de Diciembre.

Considerando: que el amparo solo tiene lugar por leyes ó actos de cualquiera autoridad que violen las garantías individuales, y no por leyes cuyas disposiciones puedan con el trascurso del tiempo, violar alguna garantía.

Considerando: que si el C. Laborin, presta desde luego, como debe hacerlo, la protesta legal á las reformas constitucionales, porque así se lo manda la ley general de 27 de Setiembre de 1873, y la del Estado de 13 de Diciembre del mismo año, no dará lugar á que llegue á suceder lo que hasta hoy solo es posible que suceda, y que aun puede no llegar á suceder, sin embargo de no prestar la protesta, puesto que la ley del Estado, solo suspende los derechos de ciudadano sonorense por el término que debe durar el empleo de la persona que debe protestar; que en el presente caso es de un año.

Considerando: que ni á la Justicia Federal, ni mucho menos á un particular, corresponde calificar la legalidad ó ilegalidad de un decreto de la Legislatura de un Estado, puesto que está prohibido á aquella, hacer declaraciones generales sobre leyes ó actos, sino solo amparar al individuo en el caso especial de que se queje; y

Considerando: por ultimo, no ser tratada la H. Legislatura del Estado, en el escrito del C. Ricardo Laborin, con la consideración y respeto á que todo ciudadano está obligado; este Juzgado, por los fundamentos expuestos, apoyado en los arts. 101 y 102 de la Constitución general de la República, falla:

1º La Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Ricardo Laborin, contra

el decreto del Estado, de 13 de Diciembre del año próximo pasado, que priva por el tiempo que debe durar el empleo de los derechos de ciudadano sonorense, á todo funcionario ó empleado, de cualesquiera categoría que sea, que no preste la protesta de la ley á las reformas de la Constitución general, por no haberse violado con tal disposición, hasta hoy, ninguna de las prerogativas que á dicho C. Laborin, concede el art. 35 de la Carta fundamental.

2º Con arreglo á la disposición terminante del art. 16 de la ley de 20 de Enero de 1869, se multa al C. Ricardo Laborin en la cantidad de \$ 100.

3º Prevengase á tute en sus escritos á los Legisladores y demás autoridades del Estado, con el acatamiento y respeto debidos.

4º Notifíquese, publíquese en el periódico oficial, y remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

El C. Jic. Fernando M. Astiazarán, lo decretó, firmando conmigo. Doy fé.—*Fernando M. Astiazarán.*—*Matías Morán*, secretarios.

Es copia que certifico. Guaymas, Diciembre 17 de 1874.—*Matías Morán*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Febrero 2 de 1875.

Visto el juicio de amparo promovido por D. Ricardo Laborin ante el Juzgado de Distrito de Sonora, contra el decreto de la Legislatura del Estado, expedido á 13 de Diciembre de 1873, que priva por el tiempo que debe durar el empleo de los derechos de ciudadana sonorense á todo funcionario ó empleado de cualquier categoría que sea que no preste la protesta de ley á las reformas y adiciones de la Constitución General, por cuya disposición se queja Laborin de que se han vulnerado en su

persona las garantías á que se refieren las fracciones 1ª, 2ª, 3ª y 4ª del art. 35 de la misma Constitución, en virtud de que habiendo sido Juez 1º local de Ures, se recusó á prestar la protesta sin reserva alguna y se lo ha tenido como incurrir en la privación de los derechos de ciudadano.

Considerando: Que la Legislatura de Sonora ha procedido dentro de la órbita de sus facultades y á consecuencia de lo que se dispone en las fracciones 5ª del art. 37 y 2ª del art. 88 de la Constitución del Estado; y que Laborin se queja de un acontecimiento á que él mismo ha dado lugar, infringiendo la fracción 5ª del art. 37 antes citados; por lo expuesto y de conformidad con los arts. 101 de la Constitución General y 16 de la ley de 20 de Enero de 1869, se decreta:

1º Que se confirma la sentencia pronunciada respecto de este juicio, á 15 de Diciembre último, por el Juez de Distrito de Sonora, que declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á D. Ricardo Laborin, contra el decreto de la Legislatura del Estado de 13 de Diciembre de 1873.

2º Se condena á D. Ricardo Laborin al pago de cien pesos de multa.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de ésta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos, lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron:—*José María Iglesias.*—*M. Auza.*—*J. J. de la Garza.*—*S. Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Febrero 16 de 1875.—*Enrique Landá*, oficial mayor.